

Mariana Mazzucato, Antonio Andreoni

No más rescates de almuerzo gratis

Project Syndicate, 25 de junio de 2020.

LONDRES - La crisis y recesión de COVID-19 brinda una oportunidad única para repensar el papel del estado, particularmente su relación con los negocios. La suposición de larga data de que el gobierno es una carga para la economía de mercado ha sido desmentida. Redescubrir el papel tradicional del estado como "inversor de primer recurso", en lugar de solo como prestamista de último recurso, se ha convertido en una condición previa para la formulación efectiva de políticas en la era posterior a COVID.

Afortunadamente, la inversión pública se ha recuperado. Si bien Estados Unidos ha adoptado un paquete de estímulo y rescate de \$ 3 billones, la Unión Europea ha introducido un plan de recuperación de € 750 mil millones (\$ 850 mil millones), y Japón ha reunido \$ 1 billón adicional en asistencia para hogares y empresas.

Sin embargo, para que la inversión conduzca a una economía más saludable, más resistente y productiva, el dinero no es suficiente. Los gobiernos también deben restablecer la capacidad de diseñar, implementar y aplicar la condicionalidad a los receptores, de modo que el sector privado opere de una manera que sea más propicia para un crecimiento inclusivo y sostenible.

El apoyo del gobierno a las corporaciones adopta muchas formas, incluidas subvenciones directas en efectivo, exenciones fiscales y préstamos emitidos en condiciones favorables o garantías gubernamentales, sin mencionar el papel expansivo desempeñado por los bancos centrales, que han comprado bonos corporativos a gran escala. Esta asistencia debe venir acompañada de condiciones, como exigir a las empresas que adopten objetivos de reducción de emisiones y que traten a sus empleados con dignidad (en términos de condiciones salariales y laborales). Afortunadamente, incluso con la comunidad empresarial redescubriendo los méritos de la asistencia condicional, a través de las páginas del Financial Times , por ejemplo, esta forma de intervención estatal ya no es tabú.

Y hay algunos buenos ejemplos. Tanto Dinamarca como Francia niegan la ayuda estatal a cualquier empresa domiciliada en un paraíso fiscal designado por la UE y prohíben que grandes receptores paguen dividendos o recompan sus propias acciones hasta 2021. Del mismo modo, en los Estados Unidos, la senadora Elizabeth Warren ha pedido condiciones estrictas de rescate. , incluyendo salarios mínimos más altos, representación de trabajadores en juntas corporativas y restricciones duraderas sobre dividendos, recompra de acciones y bonos ejecutivos. Y en el Reino Unido, el Banco de Inglaterra (BOE) ha presionado por una moratoria temporal de dividendos y recompras.

Lejos de ser dirigista , la imposición de tales condiciones ayuda a dirigir los recursos financieros estratégicamente, al garantizar que se reinviertan de manera productiva en lugar de ser capturados por intereses estrechos o especulativos. Este enfoque es aún más importante teniendo en cuenta que muchos de los sectores más necesitados de rescates

DEFENDER LO PÚBLICO es
DEFENDER NUESTROS DERECHOS

SANIDAD, EDUCACIÓN, IGUALDAD, PENSIONES,
SERVICIOS SOCIALES, MEDIO AMBIENTE,
RESIDENCIAS DE MAYORES,
TRANSPORTE, BANCA, ...
100% PÚBLICOS

también se encuentran entre los más estratégicos económicamente, como las aerolíneas y los automóviles. A la industria de las aerolíneas estadounidenses, por ejemplo, se le han otorgado hasta \$ 46 mil millones en préstamos y garantías, siempre que las empresas receptoras retengan el 90% de su fuerza laboral, reduzcan el pago ejecutivo y eviten la tercerización o la deslocalización. Mientras tanto, Austria ha condicionado sus rescates de la industria aérea a la adopción de objetivos climáticos. Francia también ha introducido objetivos a cinco años para reducir las emisiones nacionales de dióxido de carbono. Del mismo modo, muchos países no pueden darse el lujo de perder su industria automotriz nacional, y ven los rescates como una oportunidad para impulsar el progreso hacia la descarbonización del sector. Como sostuvo recientemente el presidente francés, Emmanuel Macron, "no solo necesitamos salvar la industria sino transformarla". Mientras extiende préstamos por valor de 8 mil millones de euros al sector, su gobierno exige que produzca más de un millón de autos de energía limpia para 2025. Además, después de recibir 5 mil millones de euros, Renault debe mantener abiertas dos plantas francesas clave y contribuir a un Proyecto francoalemán para la producción de baterías eléctricas. Como principal accionista de Renault, el gobierno francés podrá hacer cumplir estas condiciones tanto desde el exterior como desde el interior de la empresa.

En algunos casos, los gobiernos han ido más allá de la condicionalidad para alterar los modelos de propiedad. Alemania y Francia están adquiriendo o aumentando (respectivamente) la participación accionaria del estado en compañías aéreas, citando la necesidad de salvaguardar la infraestructura estratégica nacional.

Pero también hay ejemplos negativos. El rescate de la industria automotriz se ha desarrollado de manera muy diferente en Italia que en Francia. El Grupo FCA ha convencido al gobierno italiano, que históricamente ha otorgado grandes subsidios a Fiat, para que le otorgue a su subsidiaria FCA Italia un préstamo garantizado de 6.300 millones de euros básicamente sin condiciones exigibles. Se espera que FCA Italia se fusione con el Grupo PSA francés para finales de este año, y el Grupo FCA ya no es ni siquiera una empresa italiana. Nacido en 2014 de la fusión de Fiat y Chrysler, está domiciliado en los Países Bajos, y su sede financiera se encuentra en Londres. Peor aún, la compañía tiene un historial pobre de mantener sus compromisos de inversión en Italia, que ha caído del mapa global como productor de automóviles, tanto en términos de volumen como de vehículos eléctricos.

En otros casos negativos, las principales empresas y sectores han aprovechado su monopolio o poder de negociación dominante en el mercado para presionar contra la condicionalidad, o han explotado el apoyo de los bancos centrales, que tiende a venir con menos o ninguna condición. Por ejemplo, en el Reino Unido, EasyJet pudo acceder a £ 600 millones (\$ 746 millones) en liquidez del BOE, a pesar de haber pagado £ 174 millones en dividendos un mes antes. Y en los Estados Unidos, la decisión de la Reserva Federal de comenzar a comprar bonos de alto rendimiento más riesgosos ha alimentado los temores de riesgo moral. Entre los que pueden ganar se encuentran los productores estadounidenses de petróleo de esquisto bituminoso, que ya estaban altamente apalancados y en su mayoría no eran rentables antes de que llegara la pandemia.

Lejos de ser un paso hacia el control estatal de la economía, los rescates condicionales han demostrado ser una herramienta efectiva para dirigir las fuerzas productivas en interés de objetivos estratégicos ampliamente compartidos. Cuando se diseñan o implementan

incorrectamente, o se evitan por completo, pueden limitar la capacidad productiva y permitir que los especuladores y los expertos extraigan riqueza por sí mismos. Pero cuando se hace bien, pueden alinear el comportamiento corporativo con las necesidades de la sociedad, asegurando un crecimiento sostenible y una mejor relación entre trabajadores y empresas. Si la crisis no se va a desperdiciar, esto debe ser parte del legado posterior a COVID-19.

Mariana Mazzucato es profesora de Economía de la Innovación y el Valor Público y directora del Instituto de Innovación y Propósito Público de la UCL; es la autora de *El valor de todo: hacer y tomar en la economía global*.

Antonio Andreoni es profesor asociado de Economía Industrial y jefe de investigación del Instituto de Innovación y Fines Públicos de la UCL; es profesor asociado visitante de la Cuarta Revolución Industrial en la Iniciativa de Cátedras de Investigación Sudafricana de la Universidad de Johannesburgo.